

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 29 de Octubre de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Sinaloa por los Sres. Elorza y Mendía, contra el Administrador de rentas de Mazatlan, que se niega á recibirles varias cantidades en moneda de cobre, por pago de contribuciones causadas por introduccion de efectos que vinieron á su consignacion, con cuyo acto alegan los quejosos, se vulneran los artículos constitucionales 27 y 72 en su fraccion 23. Visto el informe del C. Administrador; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que la moneda de cobre que circulaba en Sinaloa con un valor legal, superior al de la materia de que está formada, quedó reducida á esto último, por la ley del Estado de 31 de Diciembre de 1872, que previno no fuera forzosa su circulacion, ni de admitirse en pago de contribuciones, recayendo la pérdida del valor sobre los tenedores de la moneda sin recibir indemnización alguna, por el menoscabo que sufren en su propiedad.

Que la Legislatura de Sinaloa, carece de toda facultad para rechazar y hacer cesar en su circulacion, una moneda acuñada en una oficina federal, cual es la de Culiacan, y emitida bajo la garantía de que sería recibida no solo por los particulares, sino tambien por las autoridades que le dieran curso legal y forzoso.

Considerando: que del expediente consta, que el Juez al decretar la suspensión, mandó que los interesados previamente depositaran la cantidad de que se trataba, en moneda de plata ú oro ó efectos no corruptibles, para asegurar los intereses de la Hacienda pública, cuyo acto importa una suspensión condicional no autorizada por la ley; con fundamento de los artículos 27 y

72 constitucionales y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

Primero: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juzgado de Distrito de Sinaloa, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Elorza y Mendía, contra los actos de que se quejan.

Segundo: Se advierte al Juez que decretó la suspensión del acto reclamado, que no ha tenido facultad legal para acordar dicha suspensión condicional.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Miguel Auza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 5 de Noviembre de 1874.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por D. Salvador Rodríguez por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Alega el Capitan del vapor español «Lola», Don Salvador Rodríguez, que el 2º Magistrado suplente de Circuito, ha violado en su persona la garantía que otorga el art. 8º del Código fundamental de la República, con el hecho de no haber dictado providencia sobre un escrito que le presentó; y apoyado

en su precepto constitucional, pide que usted lo ampare contra dicha autoridad, para obligarla, sin duda, á que tome conocimiento del juicio de comiso á que se contrae aquel recurso; pero por lo que consta del documento con que el C. Magistrado 2º suplente de Circuito apoya su informe relativo á esta queja, se adquiere la mas plena conviccion de que es de todo punto falso el fundamento del quejoso; porque del repetido escrito aparece que por acuerdo de la autoridad, á quien maliciosamente iba dirigido, puesto que el Sr. Rodriguez ya sabia que no estaba conociendo del negocio á que se referia, fué pasado al primer suplente que conocia de él, y de cuyo acuerdo ó providencia tambien se le dió noticia, como está justificado tambien en la adjunta certificacion tomada de las constancias de los autos referidos.

El fiscal entiendo, que la autoridad á quien se pretende hacer responsable del acto, ó mejor dicho de la supuesta omision reclamada, en nada ha faltado al art. 8º de la Constitucion federal; antes al contrario, disponiendo que se diera cuenta con el ocuso en cuestion al Magistrado que era competente para proveer acerca de lo que en él se solicita, ha no hacia mas que cumplir con su deber, el cual sin embargo habia quebrantado, si la solicitud hubiese sido resuelta por él en cualquier sentido; pues entonces el quejoso, firme en su temerario propósito de retardar por cuantos medios ilícitos esten á su alcance, el término del indicado juicio de comiso, hubiera promovido amparo contra el auto recaído por incompetencia del Magistrado que lo dicta.

De lo expuesto resulta, que no se ha violado la garantía del art. 8º de la Constitucion de la República que se tomó por fundamento de este recurso, y en consecuencia el fiscal pide á usted resolver: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Salvador Rodriguez contra el acto del C. Magistrado 2º suplente de Circuito, Carlos Peon, que ha servido de pretesto á este recurso.

Mérida, Agosto 10 de 1874.—*P. Hijuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Agosto 19 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido contra el C. Magistrado 2º suplente de Circuito, por D. Salvador Rodriguez, ciudadano español, por violacion de los arts. 8º y 33 de la Constitucion. Visto lo informado por dicho 2º suplente de Circuito; el pedimento fiscal y la citacion para sentencia, con cuanto mas ver y tener presente convino, y

Considerando: que la queja se funda en no haber providenciado el referido Magistrado un escrito que le presentó el quejoso, relativo al juicio de comiso del vapor Español «Lola» y sus efectos, de cuyo buque era Capitan Rodriguez.

Que segun aparece certificado por el C. Secretario del Tribunal de Circuito, ya el 2º suplente habia mandado dar cuenta con los mentados autos de comiso al primer suplente, por haber quedado espedito para conocer de ellos cuando lo presentaron el escrito del Capitan del «Lola», por lo que no lo proveyó, ni debió proveerlo, por que ya habia declinado su jurisdiccion, reconociendo la competencia del primer suplente, á quien hizo pasar el escrito con noticia del interesado, que consintió en ello.

Que en consecuencia, no debiendo proveer el recurso el 2º suplente, sino el 1º á quien se pasó, no ha faltado á los arts. 8º y 33 de la Constitucion federal.

Por lo expuesto y de conformidad con el parecer fiscal, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla:

1º: La Justicia de la Union no ampara ni protege á Don Salvador Rodriguez que pide amparo contra el C. Magistrado 2º suplente de Circuito, por violacion de los arts. 8º y 33 constitucionales, quedando á la calificacion de la Corte Suprema la multa en que hubiese incurrido.

2º: Ságuese testimonio de este fallo para publicar, y elévense los autos originales á la Corte Suprema de Justicia, en revision, arreglado á los arts. 13 y 27 de la ley or-

gánica de amparo de 20 de Enero de 1869
Hágase saber.—I. Manzanilla.—Ante
mí.—José A. Castillo.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Noviembre 3 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por D. Salvador Rodriguez, contra el Magistrado 2º suplente de Circuito, C. Lic. Carlos Peon, por violacion de garantías constitucionales, y considerando:

Que en el presente juicio se trata de un acto de un Magistrado de Circuito.

Que supuesta tal circunstancia, se hace indispensable examinar por punto general, si el recurso de amparo, procede contra los actos de las autoridades judiciales de la Federacion.

Que para fundar que sí procede, pudiera alegarse, que el art. 101 de la Constitucion de 1857, al establecer el recurso de amparo, lo hace extensivo, sin escepcion alguna á los actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

Que igualmente pudiera alegarse en ese sentido, la práctica constante observada en la Corte de Justicia, de considerar admisible el recurso de amparo en negocios judiciales, á pesar de prohibirlo expresamente el art. 8º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869:

Que sin embargo de estas consideraciones, la cuestion debe resolverse en sentido negativo, por varias razones de mucho peso todas.

Que de los recursos de amparo contra los actos de las autoridades judiciales de la Federacion, no podrian nunca conocer sino ellas mismas, porque el citado art. 101 de la Constitucion de 1857, comete exclusivamente á los tribunales federales, la resolucion de toda controversia que se suscite por

actos que violen las garantías individuales.

Que correspondiendo exclusivamente á los tribunales de la Federacion el conocimiento de los recursos de amparo, se introduciría un desorden ó irregularidad inevitables en la categoría jerárquica de esos mismos tribunales, sometiendo los actos reclamados de los de Circuito y de la Suprema Corte, á la calificacion y resolucion de los Juzgados de Distrito que conocen de los juicios de amparo en 1ª instancia, y que son inferiores á los otros.

Que correspondiendo á la Corte de Justicia revisar las sentencias de los jueces de Distrito, en los juicios de amparo, para aprobarlas, revocarlas ó modificarlas, llegaría así cuando se tratara de sus propios actos reclamados, á revisar á su vez la calificacion y resolucion, que sobre ellos hubiera recaído en los Juzgados de Distrito, privados de esa manera de la libertad necesaria, para semejantes actos.

Que si bien respecto de los tribunales de Circuito, procede en la actualidad, que la ley vigente no les dá intervencion alguna en los juicios de amparo, ni tal circunstancia quita la posibilidad de que una nueva ley reglamentaria les devuelva esa intervencion que han tenido ya por otra ley, ni les priva de su carácter de tribunales federales, ni permite que sus actos queden sometidos nunca á sus inferiores jerárquicos.

Que conociendo los tribunales de la Federacion en los juicios de amparo, de sus propios actos reclamados, vendrian á ser en realidad á la vez, jueces y partes en un mismo negocio, lo cual repugna á los principios mas elementales del derecho y aun al simple sentido comun.

Que en defensa de los que estiman violadas sus garantías individuales por los tribunales de la Federacion, queda siempre vivo y subsistente el recurso de exigirles la responsabilidad en que hubieren incurrido, cambiándose así mas bien, en la forma que en la sustancia, el amparo constitucional.

Que como última y definitiva contestación á las objeciones que pudieran todavía formularse, respecto de los inconvenientes de la interpretación que se dá al texto de la Constitución, queda el razonamiento de que en las instituciones humanas se acaba siempre por llegar á un punto del que ya no se puede pasar, por mas imperfecciones que presenten.

En virtud de estas consideraciones y fundamentos, se decreta: que se reforma la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan, pronunciada en 19 de Agosto del corriente año, declarándose improcedente el recurso de amparo promovido contra el C. Magistrado 2º suplente del Tribunal de Circuito de Mérida, por violación del art. 8º de la Constitución federal.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 17 de Noviembre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por varios empleados de la Aduana Marítima del Puerto de Guaymas, contra el C. Gobernador del Estado, por el cobro de una contribucion extraordinaria.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El fiscal cree fundado el presente ocurso en que solicitan amparo y protección los empleados de la Aduana Marítima: Administrador, C. Francisco Sepúlveda; Contador, C. Félix Schiafino; Oficial 1º, C. Francisco Schober, y Vista, C. Manuel Mª Alegre, por la contribucion suplementaria que les exige el C. Administrador de Rentas de esta ciudad, en virtud de la ley de 22 de Junio último, y reglamentada por el Gobierno del Estado, dos dias despues.

Poco ó nada dirá en cuanto al Sr. Schober, porque á éste, no conociéndole otros bienes que su destino y no llegando el sueldo que disfruta á la cantidad que determina el art. 1º de la referida ley, no hay duda que está exento de ser contribuyente. En cuanto á los demas empleados, que son sus sueldos de mas de dos mil pesos, estos no han sido acotados por el empleado que designa la misma ley.

El reglamento dice terminantemente: que la designación de los capitales para señalar la cuota respectiva, se hará por el Administrador de Rentas del lugar en que reside el contribuyente, no dando tal facultad, en su concepto, á la Junta revisora que señala el art. 5º de dicho reglamento; la que segun el art. 6º, no tiene esta mas atribuciones que recibir las quejas de los agraviados, para que si las considera justas, quitarlos de las listas ó disminuirles sus cuotas, y este déficit aumentarlo, no con nuevos contribuyentes, sino con los que están listados por el C. Administrador, con el objeto de que el cupo de